

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020).

Auto interlocutorio No. 228

Radicado No.	76001-23-33-000-2018-00905-00
Medio de control:	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Demandante:	MUNICIPIO DE YUMBO
Demandada:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA
Tema:	Resuelve excepciones inepta demanda y caducidad liquidación bilateral- Decreto 806 de 2020

OBJETO

Estando el proceso de la referencia para llevar a cabo la audiencia de inicial programada para el 17 de marzo de esta anualidad, no se pudo celebrar la misma por la suspensión de términos judiciales que operó desde marzo 16 a julio 1º del 2020, ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdos PCSJA20-115171, PCSJA20-115182 y PCSJA20-115673, en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Reanudados los términos, se hace necesario entonces continuar con el trámite de las actuaciones en curso, para lo cual, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 806 de 2020¹, mediante el que se privilegia el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el propósito de agilizar los procesos en curso, señalando entre otros, en su artículo 12 lo siguiente:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del

¹ Por el cual se adoptan medida para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica.

artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado.

Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable."

Así las cosas, como quiera que en el presente proceso en que se convocó la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, la demandada CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA formuló como excepciones previas **INEPTA DEMANDA SUSTANCIAL POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES POR AUSENCIA E INEXISTENCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACION , INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA POR INDEBIDA INTERGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO- CUASINECESARIO y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL PARA DEMANDAR LA ACCIÓN CONTRACTUAL DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, se procede a resolver las mismas en aplicación de la disposición en cita.

ANTECEDENTES

En el presente caso solicita el MUNICIPIO DE YUMBO se declare el incumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales por parte del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA, plasmadas en el contrato 110-11-01-841 del 8 de noviembre de 2013, materializado en las salvedades y observaciones realizadas en el acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes el 3 de agosto de 2016, y se condene a la demandada al pago de \$14.121'988.735,80, por concepto de la cuantificación de las actividades dejadas de realizar y cuyo incumplimiento ocasionó graves perjuicios patrimoniales al ente territorial.

El proceso fue admitido mediante Auto Interlocutorio No. 401 del 20 de noviembre de 2018 (Fls. 141-142 c1), y una vez notificado a la demandada el 12 de febrero de 2019 (folios 146), contestó dentro del término proponiendo las siguientes excepciones previas: (folios 169-196 C1)

INEPTA DEMANDA SUSTANCIAL POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES POR AUSENCIA E INEXISTENCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACION. Indica que en el acápite "*fundamentos jurídicos*", la parte actora se limitó a transcribir un apartado de la Sentencia C-499 de 2015 de la Corte Constitucional, referente al tema de la cuantificación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual, incumpliendo con ello a su juicio lo exigido en la Ley 1437 de 2011, artículo 162, numeral 4º, al no indicar la forma en que

el incumplimiento base de las pretensiones afectó el buen funcionamiento del servicio público, o evitó el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, siendo la ausencia de concepto de violación la que configura y da prosperidad a la excepción que se propone.

INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA POR INDEBIDA INTERGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO- CUASINECESARIO. Considera que en el caso concreto se debió demandar igualmente a la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., quien libertó diferentes pólizas de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo No. 110-11-01-841, y transcribe como soporte apartes de las sentencias del 6 de junio de 2012, expediente 2007-00133-02 (43049), M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, y del 10 de mayo de 2018, radicado No. 2002-02259-02 (39689), M.P. Ramiro Pasos Guerrero, en relación con la vinculación de las partes en un litigio.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL PARA DEMANDAR LA ACCIÓN CONTRACTUAL DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Refiere que el convenio interadministrativo contaba con un plazo de ejecución hasta del 31 de diciembre, y que teniendo en cuenta esa fecha y lo dispuesto en la cláusula vigésima del contrato donde no se estableció tiempo para la liquidación del convenio, se debía liquidar de común acuerdo dentro de los 4 meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, y habiendo vencido la oportunidad, las partes no podían pactar una liquidación bilateral.

Por lo anterior, asegura que como la liquidación bilateral se hizo el 3 de agosto de 2016 y el plazo para ello había precluido el 30 de abril de 2016, la administración contaba con 2 meses siguientes a dicho vencimiento para hacer la respectiva liquidación unilateral, plazo que feneció el 30 de junio de 2016 sin llevar a cabo la misma, configurando así la excepción de caducidad propuesta.

Finalmente dice que para cuando se solicitó la conciliación prejudicial el 30 de junio de 2018 para interrumpir la caducidad, la misma no operaba, ya que la circunstancia se había consolidado, pues el término no empezaría a correr desde el 3 de agosto de 2016 cuando se suscribió la liquidación bilateral del contrato, sino desde el 1 de julio de 2016, según lo explicado en precedencia.

CONSIDERACIONES

INEPTA DEMANDA SUSTANCIAL POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES POR AUSENCIA E INEXISTENCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACION. Para el tema que nos ocupa, el numeral 4º del artículo 162 del CPACA, establece que toda demanda debe contener, entre otros, *“4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.”*

Significa lo anterior que en casos como el de estudio, donde no se pretende la nulidad de un acto administrativo sino la declaratoria del

incumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales plasmadas en el contrato No. 110-11-01-841, el demandante tiene la carga de indicar al menos los fundamentos de derecho en que se basan sus pretensiones.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, en providencia del 29 de marzo de 2019, rad. 2016-00293-01 (62366), dijo:

"(...) Se trata de un requisito formal, cuyo control por el juzgador supone constatar que la fundamentación de lo pretendido se erige sobre normas jurídicas, sin detenerse en su vigencia o en la incidencia que tenga en el asunto discutido, puesto que dichas consideraciones pertenecen al análisis del régimen jurídico del contrato, al de la fuente de responsabilidad y, en líneas generales, a asuntos sustanciales reservados para la sentencia.

(...)

...No sobra agregar que la ineptitud de la demanda alude a la insuperable oscuridad del texto para ser desentrañado o interpretado por el operador judicial², situación cada vez más improbable dadas las oportunidades fijadas en las etapas del proceso para subsanar posibles imprecisiones en la demanda, particularmente en la etapa de admisión de la misma, e incluso en la fijación del litigio dispuesta como parte de la audiencia inicial³. (...)"

En esa medida, se observa que en el caso concreto, la parte actora invocó como fundamento de derecho a sus pretensiones los artículos 141 del CPACA, 23, 26, 28 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Constitución Política, además de transcribir un aparte de la sentencia C-499/15 de la Corte Constitucional, y expuso sucintamente los motivos por los cuales estima que el incumplimiento del contrato generó un perjuicio irremediable al Municipio, transcribiendo en los hechos de la demanda los hallazgos y salvamentos establecidos al momento de realizar la liquidación del contrato, así como los presuntos perjuicios, razones por las que se considera que el accionante en este caso cumple con la carga procesal impuesta por la norma precitada.

Ahora bien, un asunto diferente es la valoración que hace el fallador de la pertinencia y solidez de los argumentos contenidos en los fundamentos de derecho, pues dicha cuestión resulta procedente estudiarla al momento de decidir el fondo del presente asunto y no en el auto admisorio de la demanda, o en esta etapa del proceso.

Por ende, se tiene que las argumentaciones de la sociedad demandada resultan insuficientes para declarar probada la excepción propuesta.

INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA POR INDEBIDA INTERGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO- CUASINECESARIO. Sobre este aspecto, el inciso 1º del artículo 61 del C.G.P., dispone sobre el litisconsorcio necesario y su integración al contradictorio, que *"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda*

² Ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC8210 del 21 de mayo de 2016. Rad. 15001-31-03-001-2008-00043-01.

³ CPACA, artículo 180, numeral 7.

deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. (...)"

A la par, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en providencia del 2 de abril de 2018, expuso:

"...esa clase de litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que estén vinculados a ella (a la relación material objeto de debate) (artículo 61 del C. G. del P.), lo cual impone la necesaria comparecencia de todos aquellos sujetos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte, pues es un requisito imprescindible para adelantar válidamente el proceso. (...)"

Igualmente, el inciso 1º del artículo 62 del mismo ordenamiento, señala que *"Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. (...)"*

Y sobre la necesidad de la comparecencia al proceso de las aseguradoras en litigio de controversias contractuales, el Consejo de Estado en la misma providencia expuso:

"Acerca de la posición de la compañía aseguradora en los litigios relacionados con el contrato estatal, el Consejo de Estado ha observado que su intervención no es obligatoria y que la compañía aseguradora tiene derecho a comparecer al proceso contractual o a demandar por separado dentro del término legal de caducidad, por cuanto no se trata de un litis consorte necesario"

De acuerdo al marco normativo y jurisprudencial expuesto, se colige que no le asiste razón a la demandada frente al medio exceptivo propuesto, ya que pese a referir que se debe demandar a la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., por haber expedido diferentes pólizas de cumplimiento frente a las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo No. 110-11-01-841, a juicio del despacho su vinculación no resulta necesaria o cuasinecesaria sino facultativa⁴, teniendo en cuenta que lo que se cuestiona es el incumplimiento del contrato y la causación de ciertos perjuicio de índole material al ente territorial, y por consiguiente, los únicos llamados a responder serían en primer orden el Municipio de Yumbo y el Centro de Diagnostico Automotor de Tuluá, y no Seguros del Estado S.A.

Si en gracia de discusión se acreditara el vinculo contractual con la aseguradora, la existencia de la misma no implica per se la necesidad de vincular a Seguros del Estado S.A., pues ello no afecta la unidad de la sentencia.

Por lo expuesto, se despachará desfavorablemente la excepción

⁴ **ARTÍCULO 60. LITISCONSORTES FACULTATIVOS.** Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

planteada.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL PARA DEMANDAR LA ACCIÓN CONTRACTUAL DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Sobre este punto, argumenta la demandada que como el convenio interadministrativo contaba con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, y teniendo en cuenta que según la cláusula vigésima del contrato no se estableció tiempo para la liquidación del convenio, se debía liquidar de común acuerdo dentro de los 4 meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, y habiendo vencido la oportunidad, las partes no podían pactar una liquidación bilateral por fuera de dicho tiempo, en tanto ya había operado el fenómeno de caducidad de la acción.

Respecto a la oportunidad para accionar a través del medio de control de controversias contractuales el artículo 164 del CPACA, dispone:

"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...)

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

- i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;*
- ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;*
- iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;*
- iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;*
- v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga."*

De acuerdo con la norma transcrita, con el fin de contabilizar el término de caducidad de la acción, resulta necesario atender lo probado en el proceso.

Ahora, en relación con la regla de caducidad que se debe aplicar a un asunto en el que se liquida el contrato después del vencimiento de los plazos previstos, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado no era pacífica, pues la Subsección C y, solo de manera parcial, la Subsección B, sostenían que la liquidación extemporánea (bilateral o unilateral) no incide en el término de caducidad⁵, mientras que la Subsección A consideraba que la caducidad se debía contar a partir de la fecha del acta de liquidación bilateral o de la expedición del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, aún si estos actos ocurrieran con posterioridad al vencimiento de los plazos previstos para su acuerdo o expedición⁶. Esa posición fue acogida en decisiones más recientes por la Subsección B⁷.

Ante la coexistencia de criterios jurisprudenciales opuestos al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto del 1º de agosto de 2019, expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009), la Sala Plena unificó la jurisprudencia, en relación con el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de contratos que han sido liquidados después de haber vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, en el sentido de indicar que este se cuenta a partir del día siguiente al de la firma del acta o de la ejecutoria del acto de liquidación del contrato, tal como lo dispone el numeral iii) del literal j) del artículo 164 del CPACA., siempre y cuando se haya proferido dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral; y de precisar que el numeral v) del mismo literal solo se aplica cuando al momento de interponerse la demanda, se advierta que no hubo liquidación contractual alguna. Veamos:

“(…) Empero, no puede ignorarse que, si bien el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 le permite a las partes liquidar bilateralmente el contrato luego de los dos meses dispuestos inicialmente para la liquidación unilateral, tal facultad está temporalmente limitada a un término certero: los dos años siguientes al vencimiento de ese período. Como se mencionó, dicho artículo convirtió en ley lo que la jurisprudencia de esta Sección venía expresando de tiempo atrás, en respuesta a la preocupación por dejar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a la voluntad de las partes, manifestada en el momento en que estas liquiden el contrato público.

⁵ Al respecto, se pueden consultar, entre otros, los siguientes pronunciamientos: del 30 de enero de 2013, expediente, 66001-23-31-000-2000-00317-01(23136), 12 de junio de 2014, expediente 25000-23-26-000-2003-00753-01(29469), del 16 de marzo de 2015, expediente 52001-23-31-000-2003-00665-01(32797), del 28 de mayo de 2015, expediente 76001-23-31-000-2003-01431-01(36695), del 15 de octubre de 2015, expediente 25000-23-26-000-2010-00409-01(48656) del 1º de abril de 2016, expediente 05001-23-31-000-1999-01700-01(50128), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; del 13 de junio de 2013, expediente 05001-23-31-000-1995-01906-01(25439), 24 de julio de 2013, expediente 11001-03-26-000-2011-00053-00 (42002), del 9 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-36-000-2013-00525-01(47610), M.P. Enrique Gil Botero; del 5 de diciembre de 2016, expediente 25000-23-26-000-2005-02773-01(37069), M. P. Danilo Rojas Betancourt; del 30 de agosto de 2018, expediente 25000-23-36-000-2016-02326-01(60882), Stella Conto Díaz del Castillo (E).

⁶ Al respecto, se pueden consultar, entre otros, los siguientes pronunciamientos: del 7 de noviembre de 2012, expediente 44001-23-31-000-2000-00293-01(25915), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 16 de julio de 2015, expediente 25000-23-36-000-2014-01011-01(53161), del 23 de junio de 2017, expediente 25000-23-36-000-2014-00932-01(57287), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; del 10 de junio de 2019, expediente 68001-23-33-000-2015-01271-01(60542), M.P. María Adriana Marín.

⁷ Al respecto, se pueden consultar, entre otros, los siguientes pronunciamientos: sentencias del 6 de noviembre de 2018, expediente 44001-23-31-000-2005-00535-01(34830), M.P. Ramiro Pazos Guerrero, del 12 de febrero de 2019, expediente 50001-23-33-000-2015-00658-01(62979), M.P. Alberto Montaña Plata, que se apartó expresamente de sus pronunciamientos anteriores.

Sin embargo, que se le cierren caminos a esa posibilidad de librar la caducidad de la acción a la voluntad de las partes, proscrita como se encuentra por el ordenamiento jurídico, no puede llevar al extremo de limitar injustificadamente la reclamación judicial llamada a solucionar los conflictos que persistan tras la liquidación bilateral practicada en los términos que la ley claramente permite. En otras palabras, el ejercicio de una facultad consentida por la legislación no puede dar cabida a una restricción procesal no contemplada en la ley.

De este modo, cuando el artículo 11 advierte que la liquidación bilateral extemporánea puede practicarse “sin perjuicio” de los términos de caducidad de los medios de control contenidos en el artículo 164 del CPACA, supone la aplicación restrictiva de esta norma al supuesto de hecho que expresamente corresponde a ese evento, a saber, el del ap. iii. del literal j.

2.4.5.7.- Por lo anterior, considerando las pautas de interpretación restrictiva de los términos de caducidad, y de favorabilidad bajo los principios pro homine, pro actione y pro damato, la Sala recoge parcialmente su jurisprudencia para establecer una forma unificada que: en el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, conforme al ap. iii del literal j.

En este sentido, el apartado v) del literal j solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que no hubo liquidación contractual alguna. (...)” (Negrilla del Despacho).

Bajo esa línea, este Despacho precisa que, atendiendo el criterio jurisprudencial más favorable proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual coincide con la posición unificada por dicha Corporación contenida en el auto del 1º de agosto de 2019, expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009), encuentra probado:

1. que el convenio interadministrativo No. 110-11-01-841 es del tipo de contrato que requiere liquidación.
2. Que de acuerdo a lo pactado, se contaba con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que dentro de sus cláusulas se estableciera fecha alguna para su liquidación.

Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 164 del CPACA, en principio se podría decir que, según los términos legalmente establecidos, la liquidación bilateral se podía llevar a cabo hasta el 30 de abril de 2016 y la unilateral al 30 de junio de 2016.

3. La parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 30 de julio de 2018, el acta se expidió el 28 de agosto de 2018 (fl. 18 c1), y la demanda se radicó el 30 de agosto de 2018 (fl. 140 c1).

En ese contexto, se colige que como el convenio fue liquidado de mutuo acuerdo mediante acta suscrita el 3 de agosto de 2016, es decir, por fuera del término de 4 meses para su adopción bilateral -30 de abril de 2016- y del período de 2 meses para que la administración la hiciera unilateralmente -30 de junio de 2016, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento de este último plazo -30 de junio de 2018, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para este caso debe iniciar a partir del día siguiente de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, es decir del 4 de agosto de 2016 al 4 de agosto de 2018, y no como lo plantea la demandada.

Siendo así, como la solicitud de conciliación prejudicial se hizo el 30 de julio de 2018, interrumpiendo con ello la caducidad 5 días antes de su configuración; al haberse expedido el acta el 28 de agosto de 2018 (fl. 18 c1), y radicado la demanda el 30 de agosto de la misma anualidad, se instauró la demanda en oportunidad, no dando lugar a que prospere esta excepción.

Por otra parte, en relación con la representación de la demandada, observa el Despacho que el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA contestó la demanda y otorgó poder al apoderado WILDEMAN TASCON VIVEROS (Fl. 151 C1). Así las cosas, de conformidad con los artículos 75 y ss del C.G.P., por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a reconocer personería para actuar.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE:

1. Declarar no probadas las excepciones previas propuesta por la demandada de ineptitud sustancial de la demanda por falta de requisitos formales e indebida integración de la Litis, y caducidad del medio de control de controversias contractuales.
2. Reconocer personería a WILDEMAN TASCON VIVEROS, identificado con C.C. 6.445.194 y T.P. No. 86.574 del C.S de la J., para actuar en representación del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA, en los términos y para los fines del poder conferido.
3. Notifíquese la presente providencia mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 806 de 2020.
4. En firme la presente decisión vuelva el proceso a despacho para continuar con el trámite.

Notifíquese y Cúmplase


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado